

"MEYER CANTO, NICOLAS FERNANDO contra FISCO DE CHILE-EJERCITO  
DE CHILE"

RIT: T-1-2019.

RUC: 19-4-0162349-6.

Porvenir, siete de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que, con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, comparece don Marcelo Enrique Figueroa Rivera, abogado, abogado, en representación, en virtud de mandato judicial, de don Nicolas Fernando Meyer Canto, cédula de identidad Nro. 18.170.652-K, subteniente del ejército, de la dotación de la Primera Compañía de Infantería Ligera del Batallón de Infantería Ligero, de Porvenir, ambos domiciliados para estos efectos en Rafael Cañas 114, segundo piso, Providencia, Región Metropolitana, quien interpone demanda de tutela de derechos fundamentales con relación laboral vigente en contra del FISCO DE CHILE, ente jurídico que personifica al Estado de Chile, rut 61.806.000-4, representado por Dagoberta Reinuava del Solar, Abogado, Procurador del Consejo de Defensa del Estado, cédula de identidad Nro. 11.478.335-8, ambos domiciliados en 21 de mayo 1678, Punta Arenas.

Señala que su representado, ingreso a la Escuela Militar el 3 de febrero del año 2012, donde se desempeñó con normalidad, los 4 años que dura la trayectoria sin problemas de desempeño



en ningún área. Agrega que egreso de la Escuela Militar el 16 de Diciembre del año 2015, y es nombrado Alférez de Ejército por decreto supremo el 1 de enero del 2016, y que el 4 de enero del año 2016, ingreso la Escuela de Infantería para realizar el Curso Básico de Infantería o CAO (Curso Aspirante a Oficial de Arma) donde se desempeñó sin problemas, y que ingreso al Curso de Comandos el 18 de Julio del 2016, arribando al Destacamento Numero 11 Caupolicán, el 9 Agosto del año 2016, donde es encuadrado en la 1ra Compañía de Infantería Ligera y asignándose la 2da Sección, al mando de 3 cabos y 18 Soldados Conscriptos, agregando que fue ascendido a Subteniente el 4 de Diciembre del 2016, en la misma unidad.

En cuanto a los hechos vulneratorios, sostiene que se enmarcan desde el 31 de octubre del año 2018 hasta el día de hoy y que han ocurrido principalmente en el Regimiento 11 de la ciudad de Porvenir. Indica que el subteniente Meyer ha perdido sus funciones lo que ha ocasionado un estado psicológico desastroso y ejerciendo funciones menores a las que corresponden a su cargo, preparación y méritos.

En cuanto a los hechos vulneratorios, invoco el cambio de ubicación del denunciante separándolo de los compañeros y aislándolo, dejándolo solo sin hacer nada, sin asignación de tarea alguna, hasta el día de hoy. Expone que la fecha 18 de noviembre del año 2018, fue aislado en el lugar donde los soldados duermen, mientras estos realizan sus actividades habituales, propias de su función militar. Refiere que hasta



la fecha el Subteniente Meyer, no mantiene sección, la cual es la base del trabajo de un Comandante del Arma de Infantería, y que el único desempeño que mantiene, es el de cumplir el rol de Oficial de Semana, no realiza Guardia, sin ningún motivo justificado pese a que está autorizado tanto por su Psiquiatra, como por el Médico de la Unidad. Agregó que el señor Meyer hasta la fecha a concurrido dos veces a terreno para hacer instrucción, pero sin unidad de soldados conscriptos y sin trabajo de instrucción, por lo tanto, se podría decir que lo llevan a hacer nada, motivo por el cual es Capitán Nova le ordena que se fuera a los dormitorios de los soldados conscriptos y que se quede allá debido a que no es ningún aporte para el regimiento. Señala que su representado le hizo presente al Capitán Nova que lo ocurrido le molestó y le solicitó le diera la autorización para presentarse a Reclamo de manera formal y escrita, sin respuesta alguna de lo solicitado.

Invocó como hecho vulneratorio el control excesivo de tiempos y tareas, y la exigencia absurda de informes, indica que a su representado se le solicita informe hasta por que presento un recurso, sobre porque fue a comprar a la farmacia medicamentos, y sobre él porque tiene problemas psicológicos. Agrega que a principios de noviembre del año anterior se le exigió por el Comandante del Batallón informe de porque no asistió a una reunión en la Cantina del Casino de Suboficiales encontrándose con permiso y fuera del horario de servicio, y que además el 2° Comandante del batallón Sr Hernández siempre cuestiono la situación psicológica de su



representado, no entregándoles armamento para ocupar, en circunstancias que si se le está permitido por el siquiatra y preguntándole constantemente por que va al siquiatra, ordenándole hacer informe respecto a esa situación.

Agrega que al regreso de la hora médica de psiquiatría, su mandante vuelve con un certificado, el cual acredita que está autorizado a portar armas y realizar su actividad laboral con normalidad, pese a esto, se le estampa una anotación en su Hoja de Vida, la cual contempla que no puede portar armamento, debido a que se encuentra con tratamiento Psiquiátrico, esta anotación es apelada, debido a que afecta su carrera militar, indicando que consecuentemente y de igual manera lo ponen en Rol de Semana, donde tiene que contar las armas y municiones que se encuentran bajo su responsabilidad, la idea es afectarle su hoja de vida. Se adjunta Certificado porte de armas extendida por psiquiatra

Afirma que los superiores de su representado criticar permanentemente su vida privada, manifestándose en la crítica en la ortografía, de los márgenes de los escritos, y fuertes reprensiones a los hechos. Junto con lo anterior refiere la publicación en su lugar de trabajo citaciones judiciales que le afectan, dando a conocer abiertamente en un diario mural del Regimiento que el Ste. Meyer está citado a la Fiscalía Militar lo que a su entender es un escarnio público en su lugar de trabajo.



Indicó que de todas las funciones y responsabilidades que tenía su representado, como jefe de la Comisión "Cantina de Oficiales", Oficial Supervigilante de Material de Guerra, Oficial Supervigilante de Vehículos Motorizados, Comandante de Sección y "Porta Estandarte" ahora no ejerce ninguna y está aislado, con la prohibición de tomar contacto con la que fue su Unidad Fundamental reducido a realizar labores de "contador de armas y municiones".

En cuanto a los fundamentos de derecho, cito lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el inciso 2° y 3° del artículo 1° del mismo cuerpo legal, para sostener la aplicación a los funcionarios del Ejército de Chile.

Cita lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Chile, para alegar que la dignidad humana establece la obligación general de respeto lo que se traduce en un conjunto de deberes y derechos correlativos que constituyen el conjunto de bienes indispensables para el desarrollo humano. Junto con lo anterior cita lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Constitución, para sostener que las acciones descritas constituyen la vulneración de las garantías constitucionales del señor Meyer Canto, constituidos, por un lado, por el maltrato y acoso de lo que fue y ha sido objeto, por las presiones que realizó su superior jerárquico en contra de su persona, tanto en público como en privado, y por la falta del deber de cuidado que su empleador tiene respecto de su salud,



circunstancias todas que han afectado las garantías constitucionales, invocando la afectación de las siguientes garantías: 1) Artículo 19 N°1, integridad síquica, la que está siendo afectada al generarse un trastorno. Lo anterior, además, se manifiesta en la falta de sueño, dolores de cabeza, bajo estado anímico, estrés o tensión psicológica, falta de apetito, falta de deseo de realizar las labores que hacía habitualmente, preocupación, desesperanza, frustración, llanto repentino, incertidumbre frente al futuro, entre otras manifestaciones, padeciendo de trastorno ansioso debido al estrés causado en la unidad por la situación que vive ante sus mandos y está siendo tratado con ansiolíticos tipo Rize de 5 mg; 2) Artículo 19 N°4, derecho a la honra, denigrándole delante de sus pares e incluso de quienes tienen menos grado que él, lo que en una institución totalmente jerarquizada y militar relevancia e importancia, ofendiéndole en público y en privado, cuestionando su calidad moral y social, afectando el respeto que se ha ganado a lo largo de los años de carrera en la Institución, lo que causo desmedro de su imagen frente a sus compañeros; 3) Artículo 19 Nro. 16, por discriminarle arbitraria e injustamente, al aislarlo, no asignar trabajo alguno y de hostigarlo constantemente, dándole un trato vejatorio, publicando ante todo el regimiento, citaciones judiciales, todo ello sin una motivación justificada y proporcionada, simple y aparentemente, porque sus superiores quieren apartarle de la institución.

Alegó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo, la función social que cumple el trabajo y



que ella debe fundarse en un "trato compatible con la dignidad de las personas", ello obliga al empleador a que cumpla el deber de cuidado que le corresponde en conservar y cuidar un ambiente acogedor y protector de los derechos de todos sus trabajadores, ahondando detalladamente sobre lo que señala la doctrina.

Sostiene además que se cumplen con los elementos del acoso laboral, exponiendo detalladamente sobre los elementos y clases de acoso que se reconocen en la doctrina.

En cuanto a la procedencia de la acción, sostuvo la competencia de la jurisdicción Laboral para conocer de esta acción de tutela, tratándose de un funcionario de las Fuerzas Armadas, para ello invoca sentencia de Unificación de Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causa 10.972-2013, que indica que, no es posible encontrar disposiciones que «regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo, por lo que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1° del Código del Trabajo, en cuanto al ámbito de competencia del mismo, no resulta incompatible ni contrario a las normas del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Señala que atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una



categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, alegando que el Estatuto Administrativo ha sido modificado por leyes recientes para consagrar la vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado por el empleador, en el artículo 17 inciso 2°, y reconoció su dignidad como persona humana, prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta se vea afectada, lo que confirma que la Administración del Estado no es ajena al compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean respetados y conduce a promover una interpretación que permita integrar las normas del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los hechos, el ejercicio de tales derechos."., lo que indica ha sido confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en causa rol 63-2015 de la Reforma Laboral, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad, que acogió la demanda de tutela laboral y condenó al Ejército de Chile por vulneración de derechos de una soldado, y así también cita jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Excelentísima Corte Suprema descartó que la sentencia se haya dictado con infracción de ley, declarando inadmisibile el recurso de unificación de jurisprudencia que se pretendía, lo que consta en causa rol 1559- 2016.





Solicitó como peticiones concretas: a) Se acoja la demanda de tutela laboral por vulneración de las garantías constitucionales, o las que se determine; b) Se declare que el trato ha sido discriminatorio y se han vulnerado los derechos fundamentales del Señor Nicolás Meyer Canto establecidas en el artículo 19 números 1, 4 y 16 de la Constitución Política de la Republica ordenando el cese de todo acto de hostigamiento hacia su persona, y entre otras acciones; c) Que se determine: 1) Ordenar a la demandada que instruya al señor Bruno Cecconi Contreras, Martínez, Raúl Infante Posada y Hernández a realizar un curso de ética en las relaciones laborales o algún curso similar con ramos de psicología dando especial énfasis en el respeto al trato y a los derechos fundamentales de los trabajadores, en alguna institución educacional de Punta Arenas; 2) Ordenar la publicación del fallo en la primera página de la web del ejército de Chile, mediante un inserto redactado por el demandante y un link que permita ver el fallo íntegro; 3) Ordenar que otorgue a su representado, la indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo, por 11 meses de remuneración (considerando la última remuneración mensual asciende a la suma de \$1.371.628.-), que ascienden a la suma de \$15.087.908.-; 4) En subsidio de lo anterior, solicita que dicha suma total sea pagada a título de indemnización por daño moral; 5) Apercibimiento de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de las medidas decretada; 6) El pago con reajustes e intereses sobre las indemnizaciones, y las costas de la causa.



Que, con fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, comparece don Dagoberto Reinuava del Solar, Abogado Procurador Fiscal de Punta Arenas, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos con domicilio en calle 21 de Mayo 1678, Punta Arenas, quien contesta la denuncia por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, solicitando el rechazo, con expresa condena en costas.

En cuanto a la contestación, Interpuso la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, en razón de la inexistencia de relación normada por el Código del Trabajo entre las partes, sino que una relación funcionaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nro. 18.948, y DFL Nro. 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, lo resuelto por el Tribunal Constitucional en Sentencia Rol Nro. 2926-15 INA de 25 de julio de 2017, y la circunstancia de encontrarse normado el régimen de las fuerzas armadas en el Capítulo XI de la Constitución Política de la República de Chile, artículos 101 a 105, y en particular en el artículo 19 Nro. 3 inciso 5, de la referida Constitución en lo que respecta a la regulación y aplicación en materia relativa de lo administrativo y disciplinario por su Estatuto.

Alega que la única excepción de aplicación de las normas del Código del Trabajo es aquella que resulta de materias referidas a la maternidad, paternidad, y vida familiar.



Invoco el principio constitucional de legalidad, la existencia de un mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales solo de los trabajadores respecto de los empleadores en la Ley 20.087, y la actual tramitación de un proyecto de Ley que amplía el procedimiento de Tutela Laboral a los funcionarios públicos, Boletín 9476-13.

Interpuso la excepción de caducidad, fundada en lo dispuesto en el artículo 485 inciso final del Código del Trabajo, señala que con fecha 11 de octubre de 2018, la denunciante interpuso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones contra del Ejecito de Chile, en autos Rol 923-2108, oportunidad en la que denunció el sometimiento a presiones indebidas de sus superiores y funcionarios militares, con el objeto de torcer su voluntad y obligarlo a que renuncie, denunciando la vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, por lo que concluye solicitando se reestablezca el imperio del derecho adoptando todas las medidas que se estimen necesario y en concreto, dejar sin efecto las notificaciones de las sanciones del día 08 de Octubre, contenida en la Orden N° 21, y la del día 10 de Octubre, contenida en la Orden N° 11, así como todo acto de la autoridad militar que tenga por objeto impedir la debida defensa del recurrente, y solicita se ordene al Ejército de Chile de abstenerse de realizar otros actos que importen obstáculos o peligren la contestación y preparación de defensas jurídicas que competan al recurrente, además de disponer cualquier otra medida que se estime pertinente para el restablecimiento del imperio del



derecho y amparar sus garantías constitucionales, y que el recurso fue rechazado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, resolución que a su vez fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema Rol 31.593-2018.

Sostiene que el actor que el actor optó primeramente por reclamar de sus derechos a través de una acción de protección, en que sus fundamentos, derechos constitucionales invocados y pretensiones resultan similares a las formuladas en esta acción de tutela laboral planteada ante este Juzgado del Trabajo, configurándose, entonces, la situación de incompatibilidad de acciones descrita en el inciso final del art. 485 del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo fue alegada en la contestación, la falta de legitimación activa del actor y de legitimación pasiva de la demandada, en atención a los argumentos que invoco con ocasión de la incompetencia absoluta del Tribunal, en particular por no ser procedente las nociones de "trabajador" y "empleador", así como tampoco la noción de "empresa", la que a su entender sólo resulta aplicable al Estado en aquellos casos en que actúa a través de una Empresa del Estado, establecida de conformidad a la Constitución, lo que no se presenta en el caso de autos.

Alego que la demanda carece de causa a pedir, en atención a que el actor no solicitó expresamente que el tribunal declare la existencia de una relación laboral entre ellos y ninguna de las instituciones demandadas, y al no hacerlo y



encontrarse el tribunal impedido para hacerlo, por caer en "ultrapetita", la prestación solicitada por el demandante carece de causa de pedir, ya que su único fundamento inmediato sobre el que podría descansar, es precisamente la existencia de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, declaración que no ha sido solicitada y por ende escapa a la competencia del tribunal fijada en el petitorio de la demanda.

A su vez, también alegó que acción no cumple con los requisitos básicos que el procedimiento de tutela requiere en atención a que la denuncia exprese las garantías constitucionales vulneradas, la exposición precisa de las circunstancias que constituyen esa vulneración, como también la forma en que esa vulneración es consecuencia directa de actos de la demandada ocurridos durante la relación laboral, refiriendo la ausencia de circunstancias que constituyan la vulneración de garantías fundamentales, controvirtiendo expresamente los hechos que el actor describe y que expone constituirían actos desplegados por el Ejército de Chile que estima constituyen vulneración y habrían infringido su integridad psíquica, su derecho a no ser discriminado y su garantía a la honra, estipulados en los numerales N°1, 4 y N° 16 de nuestra Constitución Política de la República.

Sostuvo en cuanto al hecho alegado como cambio de ubicación del denunciante, "separándolo de los compañeros y aislándolo, dejándolo solo, sin hacer nada, sin asignación de tarea alguna, hasta la actualidad", señalo que en el septiembre del



año 2018, se recibió un reclamo por parte del Sr. Raúl Burgos Castillo, padre de un soldado conscripto, Sr. Antonio Burgos Vargas, perteneciente a la dotación de la Primera Compañía de Fusileros, informando acerca de una revista de casilleros por parte del Subteniente Nicolás Meyer del Canto, la cual se habría realizado sin presencia de los soldados conscriptos, frente a sus casilleros, producto el cual, se habría generado la destrucción y pérdida de elementos tanto personales como fiscales. Indica que producto de lo anterior, el Comandante del Destacamento Motorizado N° 11 "Caupolicán" ordenó, con fecha 27 de septiembre de 2018, instruir una investigación de seguridad militar, denominada (ISM) OI N° 04/2018, para esclarecer los hechos ya señalados, resolviendo al final de ésta estampar en su hoja de vida una sanción al denunciante, toda vez que la revista se realizó de forma antirreglamentaria, agregando que atendido a que el hecho podría, eventualmente, ser constitutivo de delito por el eventual abuso de poder, dichos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar de Punta Arenas, mediante oficio denominado "DESMOT N° 11 S-1 ( R ) N° 1595/9646 FISC. MIL. LET. EJTO. Y CARAB. PTA. ARENAS", de fecha 22 de Octubre de 2018, junto con toda la documentación de la Investigación de seguridad militar, conforme lo dispone el artículo 33 inciso 2° del DNL N° 911 "Reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas", la que actualmente se encuentra a la espera de la resolución por parte de la Fiscalía antes mencionada. Manifiesta que con fecha 23 de octubre de 2018, el denunciante fue sancionado mediante Orden del Día ( R ) N° 25 de la Primera Compañía de Fusileros: "por



la falta cometida el día 27.SEP.2018, al pasar una revista de casilleros que no estaba ordenada y dispuesta, derivando en la pérdida de casilleros que no estaba ordenada y dispuesta, derivando en la pérdida de dinero y destrozos de elementos fiscales y particulares de los SLCs”, siendo esta sanción estampada en su hoja de vida digital en el Concepto N° 9 “Liderazgo” con -1,00 puntos, todo lo cual se corroboró y se encuentra en los antecedentes de la investigación de seguridad militar. En este contexto, refiere que al existir un reclamo formal por parte del padre de un soldado conscripto, se dispuso que el Subteniente Nicolás Meyer del Canto fuera reencuadrado en la Segunda Compañía de Fusileros, como Comandante de la Primera Sección de Fusileros, realizando el mismo trabajo que desempeñaba en la Primera Compañía, y que por tanto el denunciante no fue separado de sus funciones, ni de sus compañeros, desempeñándose como Comandante de Sección de Fusileros. Precisa que la determinación adoptada fue definida únicamente como una medida preventiva, toda vez que los soldados conscriptos adujeron sentirse agredidos y vulnerados por el denunciante.

En lo que se refiere a la alegación de la denunciante sobre el control excesivo de tiempos y tareas, junto con la exigencia absurda de informes, sostuvo la denunciada que respecto de este indicio, que el calificador directo o cualquier integrante de la unidad que se encuentre en la línea de mando, debe solicitar informes respectivos para un mejor resolver, tal cual lo estipula el reglamento de disciplina en su artículo 85 inciso 2°, DL-911 “Reglamento de



*Disciplina para las Fuerzas Armadas*". Agregó que respecto del segundo informe que se indica en la denuncia, que el Oficial soltero más antiguo que se encontraba en ese momento en el casino de oficiales, el Subteniente Yako Franulic Muñoz, dispuso realizar una reunión de casino precisamente para orientar e instruir algunos procedimientos que no se estaban llevando a cabo por parte de los oficiales solteros, y que el informe que se le solicitó al actor sólo fue para esclarecer los hechos y en virtud de la facultad señalada, en atención a que ese tipo de conductas pueden ameritar una sanción disciplinaria. Al respecto cita lo dispuesto en el artículo 20 y 29 del Reglamento de disciplina referido en cuanto a la forma de cumplimiento de las ordenes, y en este contexto un Oficial más antiguo dispuso, realizar una reunión, lo cual no acató el denunciante, no dando explicación, ni menos razón de la ausencia, siendo injustificado su actuar.

En relación a la tercera fotografía acompañada, donde hace presente que se le habrían solicitado informes por asistencia al psiquiatra, indica que con fecha 16 de Octubre de 2018, el denunciante, concurrió a la enfermería aduciendo padecer fuertes dolores de cabeza, náuseas, insomnio y sentimientos de angustia, siendo atendido por la Dra. Indira Cortez Guerra, la cual lo derivó al servicio de psicología y psiquiatría, sin prescripción de reposo. Refiere que la Dra. Cortez, es médico civil contratada por el COSALE, y que no tiene la calidad de Oficial de Sanidad, razón por la que aun cuando pueda extender licencias médicas, no puede auditarlas,





encontrándole dicha facultad vedada exclusivamente al Oficial de Sanidad.

Agrega que con fecha 17 de octubre de 2018, el calificador directo realizó la Pauta de Observación Conductual para Personal de Planta (POC-PP), la que permite registrar manifestaciones de comportamiento simples y acotadas que guíen la observación de los comandantes no especialistas en cuestiones de salud mental.

Los ítems incluidos en las POC-PP van desde expresiones simples como el llanto y la irritabilidad hasta la presencia de ideas extrañas o de auto eliminación, denominados índices suicidas, y que la POC-PP, como instrumento de prevención, constituye una herramienta para determinar la idoneidad o aptitud del personal militar para el empleo de armas en el servicio, especialmente cuando se trate de problemas que involucren aspectos relacionados con la salud mental, lo que corresponde a una medida preventiva de protección y resguardo, por cuanto la especialidad de la profesión militar exige que el personal pueda y deba usar y portar armas de fuego y ayuda a prevenir eventuales usos erróneos, equívocos o el uso por parte de personal institucional en condiciones no aptas. Señala en este sentido que los Comandantes podrán restringir o prohibir el uso y porte de armas de cargo institucional al personal afectado con antecedentes negativos en dicho instrumento.



Señala que en cuanto a la derivación a médicos especialistas, requerirán que el Oficial de Sanidad de cada Unidad evalúe al personal afectado de modo general, indagando sobre las posibles causas subyacentes que puedan estar influyendo en el padecimiento, y determinar si es necesario proceder a una derivación a otras instalaciones de salud, con el fin de que profesionales especialistas en salud mental realicen un diagnóstico y, eventualmente, prescriban el inicio de un tratamiento, y que de este modo las derivaciones a psiquiatría o psicología clínica se materializan con una interconsulta previamente extendida por el Oficial de Sanidad.

Sostiene, que en atención a lo señalado, el calificador directo del denunciante, procedió a realizar la POC-PP con los antecedentes médicos descritos por el Oficial de Sanidad de la Unidad, siendo derivado con posterioridad al médico especialista, y evaluado por el psiquiatra civil, el Oficial en comento regresó con un certificado que señalaba estar habilitado para portar armas. Indica que el certificado debe ser validado por el Oficial de Sanidad de la Unidad como consta en el documento CAP-03088 "Feriados, Permisos y Licencias", en el capítulo IV Licencias Médicas en el punto 4.1.3, siendo esto realizado con fecha 21 de noviembre de 2018, quedando estampado en su hoja de vida digital con fecha 27 de noviembre de 2018.



Destaca como relevante lo anterior, porque una de las responsabilidades que se debe cumplir como Oficial de semana de una Unidad Fundamental es pasar revista diaria de las bocas de fuego del respectivo almacén de material de guerra de la unidad y semanalmente del cargo correspondiente que dicho almacén que no sean bocas de fuego, y que en ningún momento deben pasar revista de munición, ya que éstas se encuentran en los polvorines de la unidad, así señala que el denunciante no fue separado de sus funciones, sólo se reencuadró en otra Unidad Fundamental, debiendo realizar las mismas misiones que le correspondían ejecutar en la antigua unidad, y el documento al que se hizo mención, deja estipulado que no puede portar armamento, en las revistas de bocas de fuego mientras se encuentre solo, debiendo contabilizar el armamento.

Señala que en jerga militar, se le llama "bocas de fuego" a todo tipo de armamento, y que la revista diaria, se lleva a cabo los 365 días del año, de forma ineludible en una jornada normal de trabajo; al término del servicio, debiendo contabilizarse el armamento para tener un control de que las armas se encuentren en el almacén o se encuentren en la unidad que corresponda, con todas las medidas de seguridad, sosteniendo así que la medida adoptada por la denunciada es objetiva y proporcionada, y el indicio expuesto en la denuncia, carece de sustento, y deberá ser desestimado.

En lo que se refiere al indicio invocado como criticar permanentemente su vida privada, señala que el instrumento



normativo RAA-03003 edición 2014, denominado "Reglamento de Correspondencia y Documentación", que norma la forma de cómo deben desarrollarse las comunicaciones escritas en el Ejército, en el artículo 96 del Capítulo III de la Segunda Parte "Reclamaciones", del DNL-911 "Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas", prescribe que *"Toda reclamación, manifiestamente infundada o que no se ajusta en su forma y en su fondo, a las normas que rigen la conducta militar, constituye falta a la disciplina y será sancionada"*, agregando que al denunciante no se le critica, en los términos que expone, según se aprecia en la fotografía, sino que se le hace presente que *debe cuidar* que sus recursos no presenten faltas de ortografía, así como también que cuenten con los aspectos formales en la elaboración de un documento.

En relación a la alegación de la denunciada referente a *"..fuertes reprensiones a los hechos repudiables en que se encontraría efectuando mi mandante"*, precisa que la parte del documento a que hace alusión la demanda, pertenece a otro documento, el Oficio V DE Dpto. I2b ( R) N° 2465/198 del 26 de septiembre de 2017, el cual iba distribuido, a toda la V División del Ejército, y no específicamente al denunciante, firmado por el CJVDE Subrogante de ese entonces Coronel Fernando Osses Camus, documento destinado a reiterar disposiciones y disponer tomar drásticas medidas disciplinarias con el personal involucrado en accidentes automovilísticos a consecuencia del consumo de alcohol, y que no iba dirigido a modo de reprensión hacia el demandante, siendo por tanto, la medida adoptada por la denunciada es



objetiva y proporcionada, con fundamento legal, por lo que el presente indicio expuesto en la denuncia, carece de sustento, y deberá ser desestimado.

En cuanto al indicio invocado por el actor referente a la publicación en su lugar de trabajo situaciones judiciales que le afectan, atingente a la publicación de la citación de la Fiscalía Militar para el denunciante, menciona que la Orden del Día de la Unidad no tiene como fin hacer escarnio público a ningún miembro de la Institución, sino que es una especie de acto administrativo de información y conocimiento de parte de la autoridad administrativa, mediante el cual se da a conocer al personal información relevante para la Unidad, y que este documento cuenta con un orden al que deben atenerse los diferentes escalones del mando, como consta en el RAA-03006 "Reglamento Correspondencia y Documentación", en su artículo 13, aplicable respecto a todos los funcionarios, y en el cual se constata: a) Transcripción de órdenes de escalón superior o comandante de guarnición; b) Nombramiento del personal de servicio; c) Distribución del servicio diario; d) Comisión de Servicio del Personal; e) Felicitaciones; f) Castigos (Cuando corresponda); g) Permisos; h) Condecoraciones; i) Otros aspectos. Agrega que el citado reglamento prescribe que: *"Las órdenes del día deberán ser dadas a conocer a todo el personal, por medio del correo intranet y, posteriormente, se colocará en una vitrina en un lugar visible"*.



Agrega que la única intención es dar cumplimiento a dicho imperativo normativo, y no existe ninguna otra intención más que comunicar a todo el personal que se encuentra citado a la Fiscalía Militar, el día, la hora, fecha de ida y regreso, transporte, alimentación, pasajes y tenida. Expresa que la finalidad es que el personal citado tenga toda la información correspondiente y, además, pueda gestionar el otorgamiento de todas las facilidades y medios logísticos para que cumplan con sus obligaciones, entre ellas, las emanadas de un órgano jurisdiccional.

Sostiene que la naturaleza jurídica de las órdenes del día, son similares a los actos administrativos para los funcionarios, por cuanto, guarda estricta reserva de la diligencia a realizar, y su finalidad es evitar eventuales discriminaciones y apoyar al personal para el cumplimiento de sus derechos y deberes. Índica que en la Orden del Día N° 224 del Destacamento, de fecha 27 de noviembre de 2018, sólo describe que debe concurrir a una audiencia, pero no se menciona en ese documento el motivo por el cual es citado, por lo que no se evidencia vulneración alguna como la aducida en la especie, y por tanto, sostiene que la medida adoptada por la denunciada es objetiva y proporcionada, tiene fundamento legal, por lo que el presente indicio expuesto en la denuncia, carece de sustento, y deberá ser desestimado.

E) Sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales alegada por el actor:



En esta materia, resulta imprescindible negar en forma categórica la afirmación desarrollada en el escrito de demanda en orden a que el Ejército de Chile habría incurrido en presuntas violaciones de derechos fundamentales, y en especial, a su integridad psíquica, su derecho a no ser discriminado y su garantía a la honra, estipulados en los numerales N°1, 4 y N° 16 de nuestra Constitución Política de la República.

Al efecto, existen ciertas conductas objetivas que, por sí mismas, son insuficientes para configurar una transgresión a esta garantía constitucional o, lo que es lo mismo, son inidóneas para sobrepasar, por sí solas, este margen mínimo al cual se ha referido. Así sucede con aquellas conductas que configuran hechos o actos jurídicos previamente regulados por el ordenamiento jurídico en cuanto a su forma y contenido.

En definitiva, la demanda no alude a conducta alguna que, por sí misma, pueda asociarse a un grave sufrimiento de la persona que es objeto de la misma, más aún, se asocian al ejercicio de las atribuciones de las autoridades que la ley establece en orden a disponer de los recursos humanos y materiales, aplicadas en forma objetiva y respecto de todo el personal militar, sin que se haya vulnerado en forma alguna al denunciante. Todos los actos ejecutados por el Ejército de Chile se ajustaron a la legislación y reglamentación vigente, y por el contrario, el actuar del denunciante se enmarca en un contexto de negativa a cumplir con la normativa interna que rige dicha institución, fin último presumible de sus



acciones, agregando en la especie que no existen denuncias formales por parte del denunciante referida a supuestos actos de hostigamiento en la Unidad, teniendo en cuenta que los procedimientos para realizarlas están claramente descritos en la reglamentación vigente.

Por consiguiente, no han existido actos de vulneración de garantías constitucionales, motivo por el cual la demanda de autos debe ser rechazada, con costas.

Alega la improcedencia de solicitar el pago de indemnización de perjuicios, en atención a que la demanda debe ser rechazada en todas sus partes, al no existir daño indemnizable, y así como tampoco corresponde el pago de multas, y que al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, el Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre la indemnización de daño moral, toda vez que se trata de una materia del derecho común de competencia del Juzgado de Letras, y que además a legislación laboral sólo contempla la posibilidad de obtener prestaciones económicas con ocasión del despido vulneratorio de derechos, situación que tampoco considera el menoscabo moral.

Alegó además a improcedencia para obtener resarcimientos económicos deriva del artículo 495 del Código del Trabajo, cuyo numeral 3, al referirse a que el juez puede adoptar las medidas conducentes a la reparación del trabajador, excluye la indemnización por daño moral en caso de mantención de la relación laboral, pues sobre esta materia existe la expresa y





especial norma del artículo 489 del referido Código, y que en los casos, en que se mantiene la vinculación laboral, solo resultarían pertinentes los artículos 485 a 488 del Código del ramo, dentro de los cuales no se contempla ninguna clase de indemnización de contenido patrimonial, por lo que la petición del demandante carece absolutamente de fundamento legal y no podría concederse ya que no existe norma que habilite para ello, y concluye que en los casos en que no se produce un despido, es la propia ley la que establece la improcedencia de pagar suma de dinero alguna a título de daño moral por aplicación del artículo 489 del Código del Trabajo, que restringe el pago de indemnizaciones para aquellos casos en que exista despido, cita sobre la materia antecedentes de la Historia de la Ley Nro. 20.087, y Nro. 20.260.

Sostiene que además que el demandante no menciona la forma en que se produjo el daño. En efecto, el líbello no cumple con los requisitos del artículo 446 del Código del Trabajo, en especial su numeral 4°, al no efectuar una relación circunstanciada respecto a los menoscabos sufridos. Tampoco indica de forma detallada en qué consistió el daño moral, ni existe lógica alguna en los montos solicitados, ignorándose la fórmula que se utilizó para avaluar el supuesto daño.

Finalmente invoco pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sobre la improcedencia de la aplicación del procedimiento de tutela a los funcionarios públicos, en sentencia de fecha 6 de diciembre de 2018, que acogió el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 485 del



Código del Trabajo en los autos caratulados "Navarrete Jaque Marvy con Ilustre Municipalidad de San Miguel" ROL 3853-17-INA, que confirma que el funcionario se encuentra sometido a un Estatuto propio de derecho público, y que a su respecto no tiene aplicación el Código del Trabajo y, en consecuencia, tampoco el Estatuto de Tutela laboral contemplado en sus artículos 485 y siguientes.

Solicito, en definitiva, previa cita de las disposiciones legales, tener por contestada la demanda de autos, en los términos precedentemente expuestos y, en su oportunidad, acoger las excepciones opuestas, o, en subsidio, rechazar la demanda en todas sus partes, con costas.

Que, con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, tuvo lugar audiencia de preparación de juicio oral, con la comparecencia de la parte denunciante don Fernando Nicolas Meyer Canto, asistido por su abogado don Marcelo Enrique Figueroa Rivera, y de la parte denunciada el abogado don Benjamin Sagredo Reyman, por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile. En la referida audiencia habiéndose efectuado el llamado a Conciliación este se tuvo por frustrado. Junto con lo anterior, se confirió traslado a la parte denunciante de las excepciones de incompetencia, falta de legitimidad y caducidad de la acción deducida el que fue evacuado en audiencia, solicitando su rechazo en mérito de los fundamentos reseñados en la demanda, postergándose su resolución para la sentencia definitiva.



Que, en lo que se refiere a la excepción de caducidad se recibió la excepción a prueba, fijándose como hecho a probar:

1) Efectividad de corresponder los hechos que fundamentaron la acción de protección interpuesta en causa rol 923-2018 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas a los hechos que se ventilan en la presente causa.

Que, en cuanto al fondo se establecieron como hechos no discutidos: 1) Que, el demandante se desempeña como subteniente del Ejército de Chile; 2) Que, el lugar donde desempeña sus funciones el demandante corresponde al Regimiento Caupolicán del Ejército de Chile, ubicado en la Provincia de Tierra del Fuego; 3) Que, durante el desempeño de sus funciones en el Regimiento Caupolicán, el denunciante efectivamente fue cambiado de ubicación.

Que, en cuanto al fondo se establecieron como hechos no discutidos: 1) Efectividad que con ocasión de sus funciones se ha afectado la garantía fundamental contemplada en el artículo 19 Nro.1, esto es, la integridad psíquica del denunciado, así como también el derecho a la honra, y que ha resultado ser discriminado de manera arbitraria e injustificadamente, hechos y circunstancias; 2) En la afirmativa del punto Nro.1 necesidad proporcionalidad de las medidas adoptadas, y dualidad de las mismas, hechos y circunstancias; 3) En la afirmativa del punto, grado de afectación de las garantías constitucionales alegadas como infringidas, hechos y circunstancias.



Que, con fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, tuvo lugar audiencia de juicio oral con la comparecencia de la parte denunciante don Fernando Nicolás Meyer Canto, asistido por su abogado don Marcelo Enrique Figueroa Rivera, y de la parte denunciada el abogado don Benjamín Sagredo Reyman, por el Consejo de Defensa del Estado, por el Ejército de Chile.

**CONSIDERNADO:**

**PRIMERO:** Que, la acción que ha sido deducida por don Marcelo Enrique Figueroa Rivera, abogado, en representación, de don Nicolás Fernando Meyer Canto, cédula de identidad Nro. 18.170.652-K, subteniente del ejército, contra del FISCO DE CHILE, representado por Dagoberta Reinuava del Solar, Abogado, Procurador del Consejo de Defensa del Estado, cédula de identidad Nro. 11.478.335-8, e procedimiento por tutela laboral tuvo por objeto la denuncia por infracción a las garantías y derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 N°1, artículo 19 N°4, y el artículo 19 Nro. 16, de la Constitución Política de la República de Chile, en relación con el artículo 2 del Código del Trabajo, y se establezca el cese de los actos de hostigamiento, y se determine: 1) Ordenar a la demandada que instruya al señor Bruno Cecconi Contreras, Martínez, Raúl Infante Posada y Hernández a realizar un curso de ética en las relaciones laborales o algún curso similar con ramos de psicología dando especial énfasis en el respeto al trato y a los derechos fundamentales de los trabajadores, en alguna institución



educacional de Punta Arenas; 2) Ordenar la publicación del fallo en la primera página de la web del ejército de Chile, mediante un inserto redactado por el demandante y un link que permita ver el fallo íntegro; 3) Ordenar que otorgue a su representado, la indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo, por 11 meses de remuneración (considerando la última remuneración mensual asciende a la suma de \$1.371.628.-), que ascienden a la suma de \$15.087.908.-; 4) En subsidio de lo anterior, solicita que dicha suma total sea pagada a título de indemnización por daño moral; 5) Apercibimiento de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de las medidas decretada; 6) El pago con reajustes e intereses sobre las indemnizaciones, y las costas de la causa, en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que han sido reseñados en la parte expositiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que, contestando la demanda interpuesta, comparece don Dagoberto Reinuava del Solar, Abogado Procurador Fiscal de Punta Arenas, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos con domicilio en calle 21 de Mayo 1678, Punta Arenas, quien contesta la denuncia por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, solicitando el rechazo, con expresa condena en costas, interponiendo las excepciones y fundamentos, en los términos reseñados en la parte expositiva de la presente resolución.

**TERCERO:** Que, en audiencia de juicio oral la parte denunciante, incorporo prueba documental consistente en: 1) Resolución de calificador directo de fecha 14 de Noviembre



del año 2018, en donde le pide que informe por que presentó un recurso; 2) Informa situación al Comandante del Regimiento de fecha 9 de noviembre del año pasado por no haber concurrido a una cita a la cantina el 2 de noviembre del mismo año; 3) Informa situación de fecha 4 de diciembre del año 2018 al comandante del Regimiento para que informe, para que va a la farmacia; 4) Fotografía de certificado médico de mi representado otorgado por el siquiatra Luis Venegas Ojeda de fecha 18 de octubre del 2018 en donde se le permite el uso de armas; 5) Resolución de fecha 8 de noviembre en donde se le rechaza un recurso de reconsideración y se le critican no solo su ortografía sino que también respecto de los márgenes de los escritos, terminando con fuertes reprensiones a los hechos repudiables en que se encontraría efectuando mi mandante; 6) 2 fotografías de fecha 27 de noviembre del año pasado en donde se les cita a través de una publicación en un diario mural a la Fiscalía militar; 7) 5 documentos denominados "informa situación" de fecha 17 de octubre, 25 de octubre, 26 de noviembre, 27 de noviembre y 4 de diciembre del año 2018; 8) Solicitud de reconsideración a anotación en la hoja de vida de fecha 24 de octubre del año 2018; 9) Resolución de recurso de reconsideración de fecha 8 de noviembre del año 2018; 10) Reclamación a resolución que denegó la reconsideración de fecha 13 de noviembre; 11) Copia de interconsulta medica de fecha 12 de octubre del año 2018; 12) Receta médica de fecha 18 de octubre del año 2018; 13) Comunicación breve de fecha 17 de octubre del año 2018; 14) Resolución de recurso de apelación de fecha 29 de enero del año 2019; 15) Resolución de recurso de reconsideración de



fecha 24 de diciembre del año 2018; 16) Hoja de Cartilla sobre Acoso Laboral en el Ejército Anexo 1, en donde aparecen las conductas propias del acoso en el ejército; 17) Comprobante de reserva para hora médica siquiatria; 18) Dos licencias médicas del representado, de fecha 11 de Diciembre de 2018 emitido por el Dr. Luis Venegas Ojeda y de 08 de Enero de 2019 emitida por la Dra. Katharina Salinas; 19) Informe médico de mi representado de fecha 8 de enero de 2019.

Además, se procedió a requerir la exhibición de los siguientes documentos ordenada en audiencia de preparación de juicio oral, documentos que fueron exhibidos, a saber: 1) Hoja de vida y de calificaciones del denunciante. No fueron exhibidas las liquidaciones de sueldo requeridas.

**CUARTO:** Que, junto con lo anterior la parte denunciante incorporo el Informe pericial la Psicóloga Claudia Álvarez Pérez, perito que además prestó declaración en juicio.

Además, prestaron declaración en juicio oral los testigos ofrecidos por la denunciante: 1) Vicente Díaz Catalinic; 2) Marco Ortega Ordoñez; 3) Hunter Shilling Burgois; 4) Ricardo Alarcón Schytte.

Se incorporó como otro medio de prueba, Video demostrativo del denunciante ubicado al interior de dependencia cerrada, ocupada como estadía transitoria de los soldados, en el cual se encuentra sólo, video se indica como de fecha 18 de noviembre del año 2018.

Finalmente tuvo lugar diligencia de absolucón de posiciones requerida por la denunciante, prestando declaración por el Ejército de Chile don Bruno Cecconi Contreras.



**QUINTO:** Que, la parte denunciada, Consejo de Defensa del Estado, por el Ejército de Chile, incorporo en la audiencia de juicio oral prueba documental, consistente en: 1) Copia autenticada de Carta enviada por el Sr. Raúl Burgos Castillo; 2) Copia autenticada de Orden del Día (R) N°25 de la Primera Compañía de fecha 23 de octubre de 2018; 3) Copia autenticada de Pauta de Observación Conductual para Personal de Planta (POC-PP) de fecha 17 de octubre de 2018; 4) Copia autenticada de Comunicación Breve EMA(R) N°11000/475 de fecha 17 de octubre de 2018; 5) Copia autenticada de Hoja de Vida del denunciante; 6) Copia de Cuadro de fechas de Recurso del Subteniente Nicolás Meyer del Canto; 7) Copia de Sanción de Orden Destacamento (R) N°11 de fecha 10 de octubre de 2018; 8) Copia de Sanción de Orden Compañía (R) N°25 de fecha 23 de octubre de 2018; 9) Copia autenticada de Orden del Día N°224 del Destacamento de fecha 27 de noviembre de 2018; 10) Copia autenticada de Portal SIAP del denunciante; 11) Recurso de protección ROL 923-2018 y su respectiva sentencia.

**SEXTO:** Que, en audiencia de juicio oral prestaron declaración los testigos de la denunciada, constan las declaraciones de: 1) Don Luis Nova Kiessling; 2) Don Fabian Ñanco; 3) Don Marco Ortega Ordoñez.

**SÉPTIMO:** Que, en lo que se refiere a la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, es una circunstancia de hecho que este sentenciador debe tener presente que la materia ha referente a la competencia ha sido resuelta mediante recurso de Unificación de jurisprudencia, en sentencia dictada en autos Rol 10.972-2013. En efecto del análisis de lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema,





todos y cada uno de los argumentos normativos fueron invocados ante el máximo Tribunal, lo que además ha sido también reconocido respecto de la aplicación del procedimiento de Tutela Laboral a funcionarios públicos, calidad que detenta el actor y sujeto por tanto a un estatuto especial, en los autos Rol Nro. 5716-15, Rol Nro. 652.918-2016, y Rol Nro. 4.908-2019, en esta última en su considerando CUARTO al señalar que "(...) *la relación entre un funcionario público y el Estado es una de tipo laboral aunque sujeta a un estatuto especial, de manera que no resulta procedente privarlo de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo hecho que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4°citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a desempeñar una función pública. (...)*", considerando que, de los argumentos de la denunciada, en cuanto a la existencia de un estatuto especial, no se contraponen o desvirtúan lo resuelto por el máximo Tribunal, este sentenciador hace suya la interpretación de la Excelentísima Corte Suprema en lo que se refiere a la aplicación del procedimiento de tutela laboral al denunciante don Nicolás Fernando Meyer Canto respecto del Ejército de



Chile. En este sentido la existencia de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia particularmente en los autos Rol Rol Nro. 2926-15 INA de 25 de julio de 2017, que cita la denunciada, no desvirtúan lo resuelto en atención a que se trata de materia de conocimiento con ocasión de un recurso de inaplicabilidad por aplicación de lo dispuesto en el artículo 93 Nro. 6 de la Constitución, el cual por disposición de la referida norma constitucional, sus efectos sólo quedan circunscritos al caso concreto, y por tanto, correspondiendo a una materia diversa, la inaplicabilidad de la norma que se cita no fue con efectos generales, detentando la parte vigente el proceso la facultad de efectuar el requerimiento si así lo estimare procedente, lo que no afecta la competencia de este Tribunal, salvo pronunciamiento concreto sobre la causa del Tribunal Constitucional. En efecto, al no existir pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el presente caso sobre la aplicación o no de la norma, se procederá a reconocer la interpretación de la excelentísima Corte Suprema, motivo por el cual se procederá a rechazar la excepción de incompetencia absoluta con costas.

OCTAVO: Que, en lo que se refiere a la excepción de falta de legitimidad, teniendo como fundamento la alegación de inexistencia de contrato de trabajo, y de la inaplicabilidad de las nociones de trabajador, empleador, y empresa, por las razones precedentemente expuestas, se procederá a su rechazo.

**NOVENO:** Que, en lo que se refiere a la excepción de caducidad, fundada en lo dispuesto en el artículo 485 inciso final del Código del Trabajo, toda vez que con fecha 11 de octubre de 2018, la denunciante interpuso ante la Ilustrísima



Corte de Apelaciones contra del Ejecito de Chile, Recurso de Protección en autos Rol 923-2108.

Sobre este punto, traído a la vista el Recurso de Protección en autos Rol 923-2108, es posible apreciar dentro de la sentencia dictada con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que el fundamento de hecho del recurso radica en la existencia de *"(...) a actos u omisiones que perturban o impiden el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, referido a presiones indebidas por parte de superiores a funcionarios militares con el objeto de torcerle la voluntad y obligarlos a que renuncien. En efecto, agrega, el día 8 de octubre del año en curso, se notifica al recurrente una sanción e inmediatamente se le despacha a 20 kilómetros a realizar una campaña que concluye justo el día de término del plazo para presentar una impugnación reglamentaria (...)"*

**DÉCIMO:** Que, si bien dentro de los fundamentos del recurso de protección se hace alusión a la existencia de presiones indebidas que ha sufrido el actor, lo cierto es que la competencia de la Iltma. Corte de Apelaciones ha quedado delimitada por los hechos que constituyen infracción a la garantía contemplada en el artículo 19 Nro. 3 inciso 5, esto es, la garantía de un proceso racional y justo, y en tal sentido el considerando 2°, de la Iltma. Corte de Apelaciones establece que *"(...) Que, el hecho que motiva el presente recurso lo hace consistir el recurrente en la obstaculización, por parte de los recurridos, en el ejercicio de su derecho de impugnación respecto de resoluciones sancionatorias dictadas a su respecto (...)"*. En este sentido,



del tenor de la denuncia formulada es posible observar, y desprender que las garantías que se denuncian como afectadas corresponden a las reconocidas en el artículo 19 números 1, 4 y 16 de la Constitución Política, fundada entre otros ellos en los actos que se denuncian como de hostigamiento, menoscabo, a través entre otros de la privación del ejercicio de las funciones propias del actor llamado a desempeñar por Ley, siendo por tanto, sólo un elemento que se denuncia como indiciario de ellas el obstáculo el ejercicio de sus derechos, y en particular del derecho a defensa, y por tanto, no correspondiendo a los mismos hechos a los que fueron denunciados y de conocimiento por la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se procederá a rechazar la excepción de caducidad con costas.

**UNDÉCIMO:** Que, en cuanto al fondo fue alegada en la contestación, la falta de legitimación activa del actor y de legitimación pasiva de la demandada, en atención a los argumentos que invocó con ocasión de la incompetencia absoluta del Tribunal, en particular por no ser procedente las nociones de "trabajador" "empleador", y de "empresa". Sobre el particular, cabe reiterar de acuerdo a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, reseñada en los precedentes considerandos, que está al reconocer la aplicación del proceso de tutela laboral a los funcionarios públicos , se ha hecho cargo de la alegación sostenida por la denunciante en autos, tal como se expresara en el considerando SÉPTIMO, de la presente resolución fundamento que este Tribunal reconoce como interpretación correcta, y por tanto, aplicable al caso sublite, motivo por el cual se



procederá a rechazar la alegación fundada en la falta de legitimación invocada por la denunciada.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, en lo que se refiere a la alegación de falta de causa a pedir, en atención a que en nin ninguna parte de la demanda el actor ha solicitado expresamente que el tribunal declare la existencia de una relación laboral entre él y la Institucion demandada, el tribunal se encuentra impedido para hacerlo, y que por tanto, la prestación solicitada por el demandante carece de causa de pedir, ya que su único fundamento inmediato de la denuncia es la existencia de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, cabe señalar que ha resultado ser un hecho no controvertido que el demandante se desempeña como subteniente del Ejército de Chile, y por tanto, es posible establecer la relación funcionaria existente entre las partes, lo que a su vez es reconocido por la propia denunciada al momento de contestar la denuncia y alegar la incompetencia absoluta del Tribunal, motivo por el cual resultando establecido como se expresara en los precedentes considerando que el procedimiento de tutela laboral resulta procedente en el caso sublite, la alegación por falta de causa a pedir a resulta ser improcedente y por tanto, será rechazada.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en lo que se refiere a la alegación de la denunciada que la acción no cumple con los requisitos básicos que el procedimiento de tutela requiere, en particular la expresión las garantías constitucionales vulneradas, y exposición precisa de las circunstancias que constituyen esa vulneración, así como tampoco la forma en que esa vulneración es consecuencia directa de actos de la



demandada ocurridos durante la relación laboral. En lo que se refiere a esta alegación, fue posible observar que la denunciante detalla cada una de las garantías que alega como conculcadas, en particular de la reconocidas en el artículo 19 números 1, 4 y 16 de la Constitución Política de la Republica, así como también de la expresión de los hechos que a su entender configurar los indicios que invoca, motivo por el cual la defensa de la denunciada por el fundamento indicado será rechazada.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, ha resultado ser un hecho no controvertido como se expresara precedentemente, y se estableciera en audiencia de juicio oral que como hechos no controvertidos que: 1) El denunciante demandante se desempeña como subteniente del Ejército de Chile; 2) Que, el lugar donde desempeña sus funciones el demandante corresponde al Regimiento Caupolicán del Ejército de Chile, ubicado en la Provincia de Tierra del Fuego; 3) Que, durante el desempeño de sus funciones en el Regimiento Caupolicán, el denunciante efectivamente fue cambiado de ubicación.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, incorporada la hoja de vida del denunciante señor Nicolás Fernando Meyer Canto, desde el 01 de julio de 2018y hasta el día 07 de octubre de 2018, sólo consigna anotaciones de mérito, en particular, por su excelente desempeño profesional, y destacada participación como jefe del centro de costos del Casino de Oficiales.

A su vez, durante el mismo periodo, y en particular desde 09 de octubre de 2018, y el 23 de octubre del año 2018, registra tres sanciones. Junto con lo anterior fue posible observar entre el 11 de octubre de 2018 y el 30 de noviembre de 2018,



tres recursos de reconsideración, tres recursos de reclamación, y tres recursos de apelación.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, en el lugar durante el cual desempeño sus funciones el actor, Regimiento Nro. 11, del Ejército de Chile, Tierra del fuego, fue posible establecer que en el plano de las relaciones entre los profesionales y personal de la institución se vivía un clima laboral malo, hecho que es posible establecer al tenor de la declaración de los testigos, quienes se encuentran contestes en este hecho y dan razón de sus dichos al ser testigos presenciales de ello. En efecto, el testigo Marco Antonio Ortega Ordoñez, Oficial del Ejército, quien manifestó en lo pertinente que se desempeña como Oficial de operaciones y anteriormente era el Comandante de la Compañía donde se desempeñaba el subteniente Nicolás Meyer, y sobre el clima laboral en esa Unidad, respondió que en general a principio del año pasado era bastante bueno, y a raíz del tiempo ocurrieron situaciones que aquejaban tanto al subteniente Meyer como a su persona, en la cual sancionaban de acuerdo a la falta, por tal motivo uno se abstraía de salir, de tomar con trago, y que el trato hacia su persona era bueno, y con respecto a Nicolás Meyer lo calificaba bien hasta que ocurrió el tema de su choque en el cual se le hizo un juicio el clima laboral en esa Unidad, respondió que en general a principio del año pasado era bastante bueno, y a raíz del tiempo ocurrieron situaciones que aquejaban tanto al subteniente Meyer como a su persona, en la cual sancionaban de acuerdo a la falta, por tal motivo uno se abstraía de salir, de tomar con trago, y que el trato hacia su persona era bueno, y con respecto a Nicolás Meyer lo calificaba bien



hasta que ocurrió el tema de su choque en el cual se le hizo un juicio, agregando que con respecto al clima laboral se "enrarece todo", porque uno se pone más tenso, y que por situaciones personales él se tuvo que hacer de lado y dejar por un tiempo la Compañía, desconociendo si el clima laboral era bueno para Meyer.

Junto con esta declaración de don Hunter Shilling Bourgois, Oficial de Ejército, quien debidamente juramento señaló en lo referente al clima laboral en ese destacamento militar, regimiento Caupolicán Nro. 11, Tierra del Fuego, que en el año 2016 y 2017 era bueno, y que el año 2018 el clima laboral era malo y pésimo, ello porque los mandos de la unidad estaban preocupados de banalidades, se enseñaron con varia gente en los malos tratos, realizaron prácticas que no correspondían e hicieron sobre esfuerzos para perjudicar al personal, precisando que dentro del contexto del segundo semestre del año dos mil dieciocho, el ambiente laboral de la unidad estaba muy desgastado, que tres personas perjudicaron a mucha gente, le hacían la vida casi imposible, "buscaron de manera sistemática entre los tres ya que era una cadena de mando perjudicar tanto a Nicolás Meyer como a varias personas", y que de esto se dieron cuenta muchas personas, hechos respecto de los cuales declara a partir de lo que presencio y escucho de otras personas de la citada unidad Militar. En este sentido, destaca también la declaración de don Ricardo Alarcón Schytte, oficial de ejército, quien debidamente juramentado en lo pertinente expreso que actualmente se encuentra con licencia psicológica porque sufrió persecución por parte de los mandos de la unidad,





precisando que sufrió persecución por parte del comandante Hernández, del comandante Cecconi, del mayor Ríos, del Coronel Paul Infante Posada.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, ha sido posible establecer en cuanto a los indicios de vulneración de derechos fundamentales alegados por la denunciante, que su existencia no fue controvertida por la denunciada, si la afectación que se denuncia. En efecto, del análisis de la contestación de la acusación, en lo que se refiere al: 1) Cambio de ubicación; 2) Control de los tiempos y tareas, exigencia de informe; 3) Criticar permanentemente su vida privada, y; 4) Publicar en su lugar de trabajo citaciones judiciales, ha resultado establecido que las conductas si fueron ejecutadas en el ejercicio de las facultades que la ley reconoce a las autoridades de la Unidad Militar, Regimiento de Infantería Nro. 11, Caupolicán, Tierra del Fuego, lo cual se encontraría refrendado en las facultades que son reconocidas en el Reglamento de disciplina y en el Reglamento de Correspondencia y documentación, motivo por el cual del sólo ejercicio de la facultad no conlleva necesariamente la afectación denunciada.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, no obstante lo señalado en el precedente considerando, es una circunstancia de hecho, que este sentenciador no puede obviar, que los funcionarios públicos, deben actuar inspirados por el principio de probidad administrativa, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Chile, principio que es determinante en cuando a la forma como se ejercen las facultades de la autoridad, y complementario del principio de



juridicidad, reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Chile, informado por los principios de reconocidos en los artículos 1, 2, 3 del DFL Nro. 1/19653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18.575, en particular, el sometimiento a la Constitución y las Leyes, y probidad, este último principio que además se nutre de un contenido ético mayor tratándose de las fuerzas armadas en lo que se refiere en todas y cada una de las funciones que desempeñan, y en particular a partir de lo establecido en los artículos 1 y 45, de la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas, en lo referente a la defensa de sus valores fundamentales, y lo establecido en el artículo 12, 13, y 18, del Reglamento de Disciplina de las FFAA., el artículo este último al disponer que "El oficial en todo momento, debe inspirar confianza en sus subalternos; cuidara, por lo tanto, de no cometer ningún acto que pueda menoscabar su prestigio o el afecto de sus subordinados".

**DÉCIMO NOVENO:** Que, en lo que se refiere a la situación que afecto al denunciante, fue posible observar que, junto con el ejercicio de las facultades disciplinarias, un comportamiento de las autoridades de la unidad, Regimiento Nro. 11, Caupolicán, que excede el ámbito de sus atribuciones, y que dicen relación a la forma como ejecutaban o impartían instrucciones en relación con el denunciante de autos. En efecto, demostrativo de lo anterior resulta la declaración del testigo, Vicente Díaz Katalinic, Oficial de Ejército, testigo de los hechos que declara, quien en lo pertinente expresa luego de exhibido el video que demuestra la situación



en la que se encontraba el denunciante, que reconoce a la persona del vídeo como el subteniente Meyer, que eso fue en mediados o inicios del mes de noviembre, que corresponde al período en qué se van a terreno en el sector de las Mercedes, donde hay un colegio abandonado que se ocupa por la unidad para realizar instrucción junto con sus alrededores. Agregó que se encontraba con su unidad trabajando y que le designaron al subteniente Meyer para qué le hiciera apoyo ya que no lo encuadraron ningún soldado ni nada *"que estaba flotando por decirlo así"*.

Consultado sobre por qué usó la palabra "flotando" respondió que ellos se titulan para ser comandantes de sección, qué ese es el título que ostentan y que aquello significa que el comandante de sección se encuentra a cargo de 3 cabos, clases de Ejército los cuales tienen soldados a cargo, y el comandante de sección está a cargo tanto de los Cabos, y de la organización, de los soldados y que no puede pasar nada sin que el comandante de sección mueva su unidad, y que si el comandante de sección no se le da a cargo una sección entonces no es comandante, no tiene nada que administrar, es como *"trabajar en un escritorio vacío"*.

Agregó que él sí tenía su sección designada y que al subteniente Meyer no le designaron ninguna sección debido a que lo acusaron de diferentes problemas, que Meyer estaba en la 1ª Compañía encuadrado en su sección, y que los sacaron de ahí por los motivos que presentaron, y lo encuadraron en la 2ª compañía, y que al cambiarlo deberían haber asignado una sección para poder desempeñar su trabajo propiamente tal y



que no se le asignó nada y lo dejaron como de apoyo a la instrucción.

Consultado sobre si es reglamentario el dejarlo como apoyo a la instrucción respondió que no se encuentra reglamentado, lo cual desconoce ya que según el reglamento de disciplina el cese del trabajo es considerado una sanción *"y qué en ese momento puede decirse que prácticamente ceso su trabajo porque no comandaba nada"*. Expreso que el capitán Luis Nova qué es el comandante de la 2ª Compañía *"designó al subteniente Meyer como su ayuda de instrucción"*, agregando que Los oficiales somos instructores principales, y los Clases son instructores auxiliar, y que no pueden haber dos instructores principales, y que por tanto, el único apoyo que podía prestar el subteniente Meyer Era *"por favor anda a dejar una bandera allá"*, para señalar un límite de la cancha, o *" si se me olvida algo recuérdamelo"*, no puede hacer más que eso. Expreso que mientras estaban realizando la instrucción en la cual consistía que tenía que mover a los soldados a trescientos metros al frente de la trinchera y después devolverlos, el subteniente Meyer lo iba siguiendo, y tenía que estar atento a lo que le dijera, *"siendo que el subteniente Meyer dentro de lo promoción, somos de la misma promoción, es más antiguo que yo, o sea tuvo mejor calificaciones que yo"*, entonces él estaba como subordinado suyo, *"por decirlo así"*, y que aquello no es correcto ya que al ser más antiguo estando dentro de la misma promoción se otorgan diferentes puestos.

Consultado sobre qué pasó después como llegó el ahí, respondió que dentro del desarrollo de la instrucción llegó



el Capitán Nova, Comandante de la compañía y se acercó a ellos y les dijo: *"Meyer que estai haciendo estai puro webiando, estai puro jugando, se nota que no estai haciendo nada, no servi pa nada, ándate a la cuadra"* y que Meyer responde *"pero como si usted me designo que estuviera acá"*, y que este le respondió que no, *"ándate a la cuadra y espera allá que lleguen los soldados"*, y el subteniente Meyer se dirigió a la cuadra, al colegio donde duermen los soldados y se quedó allí hasta que llegamos nosotros.

Consultado sobre si habían otras personas cuando el comandante Nova le dijo eso, respondió que sí, habían soldados y cabos, y que la expresión fue primero que todos se sorprendieron, si él lo designo que estuviera ahí y después no lo quería ahí era contradictorio y él estaba cumpliendo la orden que se le dio que era apoyar la instrucción, a pesar de no tener sección o no poder ejercer su puesto, ya que no estaba encuadrado, y que *"no tenía armamento para poder demostrar el ejercicio"*, y la cara fue de frustración ya que estaba haciendo lo que se le ordeno, y no pudo hacer nada al respecto

**VIGÉSIMO:** Que, si bien la declaración del testigo Vicente Díaz Katalinic, Oficial de Ejercito, puede aparecer en contradicción con lo manifestado por el testigo don Luis Alberto Nova Kisler, Oficial de Ejercito de Chile, quien reconoce el año pasado Meyer paso a prestar funciones en su unidad, y que frente a la consulta sobre que fue a hacer a Terreno Meyer, respondió que básicamente se mantenía como Comandante de sección, lo que no lo limita para poder realizar instrucción, lo limita para portar y utilizar



armamento, y Consultado entonces sobre que funciones tiene que hacer, respondió que Oficial de semana, dentro de Comandante de sección puede realizar instrucciones que no estén relacionadas con armamento, esta última declaración resulta desvirtuada, y por la declaración de don Hunter Shilling Bourgois, Oficial del Ejército de Chile, quien en lo pertinente expreso que en relación a la situación del señor Meyer cuando subió a terreno, que sabe que a él le sacaron la instrucción y lo dejaron sólo. Consultado sobre que significa que lo dejaron solo, respondió que como oficial uno debe subir a estar a cargo de una instrucción, una o varias instrucciones o una o varias canchas, esa *"es la labor de nosotros, nuestro trabajo"*, de los oficiales de infantería, y que en el caso de él, lo subieron por el hecho de subirlo, para no tenerlo abajo en el cuartel, y lo dejaron sin instrucción, no tenía mando, no tenía personal a cargo, lo subieron por subirlo. Consultado sobre cómo se enteró de eso, respondió que fue por los mismos clases con los que el andaba ya que tiene mucho contacto con el personal del cuadro permanente, ya que había trabajado dos años en el Batallón de Infantería, y que ellos le comentaban *"pucha está complicado el tema del subteniente Meyer, se nota que el mando no lo quieren, lo tiran pa la cola"*, esas eran las frases.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, del mismo modo ha sido posible establecer que la situación vivida por el señor Meyer, en la Campaña o salida a terreno de finales de octubre inicios de noviembre de dos mil dieciocho, no correspondió a una situación de carácter aislada, sino que como expresara el testigo don Hunter Shilling Bourgois, Oficial del Ejército de



Chile, que fue testigo de a lo menos de dos situaciones que fue a lo menos dos situaciones, en la cual ésta u involucrado el subteniente Meyer, señalando en lo pertinente que en una situación en la cual, iba pasando por fuera de la comandancia y que escucho como el comandante Cecconi, después de haber conversado con el mando, le dice al teniente Meyer, de que se vaya de baja, que deje de hacer problema al ejército, y que si se va solucionaría el problema al resto, que dejara de perjudicar a la gente, agregando que además supo de otros comentarios sobre el señor Meyer, que porque cuando hablaban de Nicolás Meyer, siempre hablaban que era un "cacho", que era un "problema", lo que decían delante de todos los oficiales del Destacamento, más y menos antiguos que Nicolas Meyer. Declaración del testigo que además adquiriera valor considerando no sólo su rango militar a la fecha de los hechos que relata, sino que además la función que desempeñaba como en año dos mil dieciocho como segundo Comandante en la Compañía Logística administrativa, relatando que en virtud de ello asistía a reuniones donde se tocó el tema del subteniente Nicolás Meyer y que hablaban, se mofaban de él, lo llamaban como que *"hoy día se va a tirar a loco"*, va a tirar una licencia, a este gallo hay que darlo de baja, hay que buscar para que se vaya.

Sobre esta última circunstancia de hecho, en cuanto al ánimo de la superioridad frente al señor Meyer, se encuentra conteste la declaración del testigo don Vicente Díaz Katalinic, Oficial de Ejército de Chile, quien en lo pertinente expreso referido al trato que recibía el señor Meyer, del Capitán Nova como comandante de compañía, no era



un trato agradable, refiriendo como ejemplo que el capital trataba de "corregirlo", pero de una mala manera, lo trataba de "oye ya po weon enchufate, siempre andai dando la hora", esos eran los términos que ocupaba y se daba vuelta en lo mismo, precisando con ocasión del contrainterrogatorio que escucho al Capitán Nova cuando señaló "estoy chato de este huevón se manda puras cagadas y no estoy ni ahí con ayudarlo, no voy a hacer más el padrino de este huevón" "estoy chato del culiao", y que el Comandante Cecconi también le decía "oye yapo tení que hacer tu pega", "estai ganando plata eri oficial, si queri te vai la puerta es grande, nosotros no queremos weones penca en el Ejército", agregando que eso lo escucho y que también le pasaron situaciones similares, y que asume que son cosas que le afectaron al subteniente Meyer. Junto con lo anterior ilustrador resulto la respuesta que otorgo frente a la consulta si había una opinión generalizada sobre el trato a Meyer, respondiendo que la mayoría de las personas consideraba que Meyer trabaja bien, y que eran injustos porque la final "le estaban buscando la quinta pata al gato", de ver "cuando se caía Meyer o estar atento a lo que hiciera apenas podían mandar un informe si podía subir a sanción o a amonestación mejor", por su parte, don Ricardo Antonio Alarcón, Oficial del Ejército de Chile, expreso en lo pertinente como testigo presencial que como asesor de mantenimiento asistía a las reuniones del mando, donde estaban los jefes, estaba el coronel, el segundo comandante, los comandantes de cada unidad y que en estas reuniones se tratan temas atinentes al servicio, así también temas más personales de la unidad y en ella se hacía alusión a ciertos





personajes de la unidad que había que cargarlo y uno de esos era Nicolás Meyer. Consultado sobre quiénes eran los que más hablaba de eso respondió que eran Hernandes y Cecconi a quienes escucho que usaban expresiones como hay que hacerse cargo del Meyer, hay que cargarse al Meyer. El testigo Ricardo Alarcón Schytte, manifestó que el junto con Valladares presidian las reuniones junto con los jefes, porque ambos daban el asesoramiento directo, y ella como tenía esa llegada aprovechaba de tirar basura a Meyer, directamente ante los jefes, en ese tiempo estaba el Coronel Infante, el Coronel Cisternas, pero este último en general se abstenía, y decía el subteniente joven hay que ayudarlo, apoyarlo, hay que enseñarle, y los otros como el Comandante Hernández y el Comandante Cecconi, señalo que expresaba "yo me voy a hacer cargo, hay que cargárselo".

**VIGESIMO SEGUNDO:** Que, en este contexto ha sido posible establecer que el denunciante fue efectivamente privado de sus funciones como Comandante de Sección, y que tal privación en los hechos no fueron consecuencia del resultado de la aplicación de una medida disciplinaria, sino que de la conducta desplegada por entre otros por los Oficiales don Luis Nova Kiessling, y don Bruno Cecconi Contreras, superiores jerárquicos directos, no siendo posible establecer a partir de la prueba que fuera incorporada que ello encuentre su fundamento en instrucción interna o disposición reglamentaria. En efecto, resulta de interés, destacar que en la diligencia de absolución de posiciones el absolvente don Bruno Cecconi Contreras, manifestó sobre la función que desempeñaba el subteniente Meyer que era comandante de la



sección de fusileros de la 1ª compañía de fusileros, y que fue recuadrado en la 2ª compañía de fusileros realizando la misma función que realizaba en la 1ª Compañía Comandante de la sección de fusileros, sin embargo a su declaración que se le resta valor, toda vez que afirmo qué fue el médico militar el qué le dijo que no podía portar armamentos y mientras no sea visto por el médico militar no pueden dar la autorización de portar armamento, no obstante en los hechos si porto armamento, a lo menos cuando concurrió a la Campaña de acuerdo con lo expresado por el testigo Vicente Díaz Katalinic, quien señaló con ocasión del contrainterrogatorio, a partir de la consulta sobre si sabiendo que existía la prohibición de llevar armamento igual le permitió llevar el fusil a Meyer respondió que sí que "autorizó" para que subteniente Meyer retirada y portará el fusil debido a que esa orden no depende de él ya que Meyer es más antiguo que el Y el que da la orden es el comandante de compañía en ese caso el capitán Nova.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, del documento incorporado denominado como "CONDUCTAS DE ACOSO SEGÚN FACTORES DE RIESGOS", del Ejército de Chile, se contempla entre otras el Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva, no asignar tareas, las cuales ha sido posible establecer en los hechos a partir de la prueba precedentemente reseñada en los precedentes considerandos.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, en este orden de ideas acreditándose la existencia de conductas que el propio Ejército de Chile reconoce como constitutivas de acoso, ha resultado acreditado que efectivamente en los hechos el denunciado durante el



segundo semestre del año dos mil dieciocho ha recibido un trato que lo ha menoscabado en su calidad de Oficial de Ejército, y consecuencialmente en su persona, por el actuar conjunto de a lo menos dos oficiales superiores, resultado por tanto, que ha recibido un trato discriminatorio a partir de las sanciones disciplinarias que le fueran impuestas, lo que ha afectado su integridad psicológica, su honra en atención a la potestad de mando que detenta en virtud de lo dispuesto en el artículo 38, referida a la antigüedad, y 45, relativo a la potestad de mando, contemplada en la Ley Nro. 18.948, y la Libertad de Trabajo en atención a las situaciones de discriminación precedentemente asentadas.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, en lo que se refiere a la afectación psicológica del denunciante ilustrador resulto el testimonio de don Vicente Díaz Katalinic, quien expreso que por las situaciones que vivía el señor Meyer, vio que eso iba causando un desgaste, ya no almorzaba, comenzó a adelgazar, y que coloquialmente comenzaron a llamarla "la dieta del informe", porque estaba tan preocupado al final de realizar los informes y cumplir con los horarios que le daban para entrega o no caerse en algunas palabras, se preocupada de los márgenes y de la ortografía y no del fondo, del testigo Marco Antonio Ortega Ordoñez quien manifestó que el señor Meyer actualmente se encuentra con licencia médica, y del testigo Ricardo Alarcón Schytte, quien manifestó que Nicolás Meyer que se sentía mal, que tenía pesadillas, que no podía dormir, le pedían informes de un momento a otro con horarios súper estrechos, y que vio el estrés, los temblores y que por eso trato de darle apoyo, lo que además resulta esperable como



consecuencia de los hechos precedentemente asentados, y en este sentido en informe pericial, incorporado en audiencia, emitido por la perito Psicóloga Claudia Álvarez Pérez, quien manifiesta en sus conclusiones que dan cuenta de una alta afectación en el ámbito personal, social, profesional, y familiar, dichas conclusiones no aparecen desvirtuadas por las deficiencias metodológicas denunciadas por la demandada, ellas han sido posibles apreciar a partir del relato de los testigos precedentemente indicados, y con las copias de las Licencias médicas de fecha 11 de Diciembre de 2018 emitida por el Dr. Luis Venegas Ojeda y la de fecha de 08 de Enero de 2019 emitida por la Dra. Katharina Salinas.

**VIGESIMO SEXTO:** Que, en lo que se refiere a la procedencia de la indemnización reclamada, el artículo 489 en su inciso 3 establece limitación referida a su procedencia para el caso que la denuncia sea formulada con ocasión del despido, sino que por el contrario de manera expresa se contempla del pago de una indemnización adicional, regulándose la procedencia de esta última para el caso que la denuncia sea acogida, el legislador expresamente la contemplo bajo dicho supuesto, y por tanto, no siendo permitido al interprete distinguir, se dará lugar a ella fijándose en un valor correspondiente a once meses de la última remuneración del actor.

**VIGESIMO SÉPTIMO:** Que, para los efectos de determinar la última remuneración, si bien no se cumplió con la exhibición de documentos, lo cierto es que a partir de la propia declaración de los testigos ha sido posible establecer que el señor Meyer, tiene una remuneración aproximada de \$1.000.000.- (un millón de pesos).-, y por tanto, siendo de



cargo de la denunciada la exhibición de documentos correspondientes a las liquidaciones de remuneraciones, lo que no cumplió, se procederá a establecer en este último valor, fijándose en su máximo en atención a las garantías conculcadas, proyección temporal de la afectación.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, en lo que se refiere a las medidas tendientes a obtener la reparación, estima este sentenciador que aquellas que han sido solicitadas por el actor, satisfacen su pretensión en particular para la abstención de futuras conductas como las establecidas ya sea referidas al actor u otro funcionario de la Institución, limitándose a aquellos funcionarios respecto de los cuales efectivamente ha sido posible establecer como ejecutores de las conductas denunciadas.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que, el análisis de la restante prueba rendida e incorporada no altera lo resuelto.

**TRIGÉSIMO:** Que, la prueba incorporada ha sido valorada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo.

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que, se procederá al pago de las costas, en atención de resultar plenamente vencida la demandada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, y siguientes, 63, y 446 a 462, 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículos 1, 6, 7, 8, y 19 Nro. 1, 4, y 16, de la Constitución Política de la República de Chile, SE DECLARA:

I. Que, se rechaza la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, con costas.

II. Que, se rechaza la excepción de CADUCIDAD de la



acción, con costas.

III. Que, SE ACOGE la demanda por TUTELA LABORAL POR INFRACCION a los derechos fundamentales del señor Nicolas Fernando Meyer Canto, en particular a la garantía consagrada en el artículo 19 Nro. 1, 4, y 16, de la Constitución Política de la República de Chile, interpuesta contra del demandado Ejército de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, y en consecuencia se condena a pagar al demandante las siguientes prestaciones:

A) La suma de \$11.000.000. -(once millones de pesos) correspondientes a las once últimas seis remuneraciones de sueldo del actor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo.

IV. Que, se adoptan como medidas correctoras, las siguientes: a) Que, la denunciada Ejército de Chile procederá a instruir al señor Bruno Cecconi Contreras, a realizar un curso de ética en las relaciones funcionarias, con especial énfasis en el respeto al trato y a los derechos fundamentales de los trabajadores; 2) La publicación del fallo en dependencias del Regimiento Nro. 11, Caupolican, Tierra del Fuego, en un lugar que permita el acceso de todos los funcionarios.

V. Que, se condena en costas a la demanda.

VI. Que, las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes e intereses que dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.



VII. Remítase copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo.

VIII. Ejecutoriada que esté la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: T-1-2019.

RUC: 19-4-0162349-6.

Dictada por don Franco Daniel Reyes Pozo, Juez Titular,  
Juzgado de Letras del Trabajo de Porvenir - Tierra del Fuego.

